

La imposible Democracia Mexicana

Rafael Segovia

No es necesario ser zahorí para saber que la democracia, como régimen político, no está, en México, a la vuelta de la esquina. Olvidense por un momento las razones y compulsiones externas que obran en su contra, como son nuestra situación geopolítica, la desastrosa postura de nuestra deuda externa, la dependencia tecnológica de nuestra industria y de nuestra agricultura. Olvidense también del nivel de ingresos de la mayoría de las familias mexicanas y de los niveles de escolarización de la población. La pregunta viene de otro horizonte: ¿hay alguien en México, que gane más de tres mil pesos mensuales, interesado en el establecimiento de una democracia no adjetivada, o sea limitada? Se necesitaría estar dominado por un cinismo extremo para contestar lisa y llanamente, sí. Y si alguien se atreviera a dar tal contestación, la segunda pregunta que se debería formular sería la siguiente: ¿está usted dispuesto a pagar el precio de la democracia? Si el obstinado mantuviera su respuesta, habrá de recurrir el entrevistador a la tercera interrogación: ¿dónde piensa usted asilarse? De ser esta respuesta honesta y verdadera no dejaría de ser sorprendente y divertida.

Partamos, pues, de que la democracia no es algo querido y buscado por aquellos mexicanos que tienen una mediana capacidad para influir sobre la forma adoptada por el poder en México, pues la democracia es una formalización del poder. Quienes consideran imposible su implantación, se apoyan, con sobrada justicia, en la debilidad del Estado, porque este, alegan, cuanto más débil, con mayor frecuencia se siente obligado a recurrir a violencia extralegal. Al Estado mexicano para mantenerse en algún momento de su historia reciente le fue imperativo infringir a veces los límites que el mismo se impuso. "La ley es la ley aunque sea anti-constitucional" dijo con una frase tan cierta como infortunada un ilustre e inteligente senador de la República. No era un chiste ni una salida de tono —la circunstancia no se prestaba al humor—, sino el reconocimiento de una acción extralegal, violenta y no contemplada en los textos constitucionales, ante una situación imprevista en la que estaba en juego la propia existencia del Estado. Tuvo, en aquel momento, al menos una ventaja: las reglas del juego, las reglas de aquel juego, quedaban definidas.

El problema introducido por la extralegalidad de algunas acciones del Estado, abiertas o encubiertas, ha sido una práctica a la que han recurrido todos los Estados, incluso aquellos que presumen de la más puntillosa legalidad. Pero el problema se agrava cuando la extralegalidad se convierte en una práctica cotidiana, cuando la legalidad pierde su permanencia y, por ende, su fuerza, cuando se hace norma y no excepción. Ante la reiteración de ese tipo de acción el ciudadano común y corriente pierde cualquier capacidad de previsión de la actividad estatal. De la imprevisibilidad a la incredulidad el camino es muy corto.

El Estado mexicano fijó sus propios límites, pero siempre cuidó el dejar una zona de claroscuro donde las libertades individuales han encontrado un terreno pantanoso e inseguro. A esto se añade la capacidad conferida por la constitución a los gobiernos para fijar las líneas mayores y menores de su política. Respetando los textos constitucionales, la latitud de que dispone el ejecutivo mexicano es inmensa. El gobierno del presidente Echeverría se ha propuesto la consecución de una democracia social. Su contenido no ha sido definido de manera clara e inequívoca, a través de metas precisas y concretas que conquistar. Sólo a través de sus glosadores puede adivinarse más que entenderse qué es una democracia social.

Basándonos en la recurrencia de la idea, podemos suponer que la democracia social ha radicado en la unión de las grandes mayorías —¿las hay pequeñas?— con el gobierno. Se ha intentado favorecerlas rompiendo las trabas legales, la inercia de un aparato político-administrativo incompetente y corrupto. Los inconvenientes surgieron de esta falta de respeto por las normas, consideradas un remanente arcaico del liberalismo del siglo pasado y en un principio justificado desprecio por las instancias representativas de la nación. El problema por solucionar es cómo conseguir esa unión mística —en el sentido etimológico— entre las mayorías y el líder si no se pasa previamente por el totalitarismo: los líderes carismáticos hubieron de eliminar a cuanta institución representativa se les puso por delante para llegar a “expresar” a las masas o a los pueblos. En México, para nuestra fortuna, las instituciones, con todo y su debilidad, tienen más vida de la supuesta por intelectuales, políticos y periodistas ansiosos de esta vinculación directa entre gobernante y gobernados.

Romper, o intentar romper, con las formas legales del régimen, buscar acelerar a la historia sabiéndose de antemano la imposibilidad de la revolución, llevaría a un enfrentamiento incontrolado de las fuerzas reales donde se conocería al vencedor de antemano. Buscar el ejercicio del poder prescindiendo de las estructuras políticas reales o es un infantilismo en el sentido que le dio Lenin o un “carriero” desenfundado, empeñado en racionalizar y acomodar *ad usum delphini* los impulsos informados procedentes de las instancias superiores.

No queda, hoy por hoy, sino reconocer el valor del sistema imperante y su posible, aunque no probable, reforma. La interdependencia entre los factores reales de poder y los actores políticos tuvo en México una capacidad de adaptación y de supervivencia casi inexplicable. Durante medio siglo el sistema político probó su resistencia frente a sediciones e infidencias, fue capaz de soldar las fracturas internas y supo cooptar a un nuevo personal político y burocrático (¿reconocería Alvaro Obregón a los “revolucionarios” de nuestros días? El general Calles, sin poder reconocerlos esbozaría una sonrisa de satisfacción) que cambió de manera gradual el origen social de sus componentes. Y fue capaz de mantener una injusticia social abierta y manifiesta para mantener un crecimiento económico que durante casi veinte años fue alabado por quienes hoy lo condenan. Resulta fácil descubrir los defectos engendrados por el sistema; pero es más difícil que fácil negar sus méritos. Ya don Daniel Cosío Villegas se preguntaba hace unos treinta años si la Revolución no había dado de sí cuanto podía dar. La respuesta fue una mutación y una adaptación —el alemanismo— que duró, con leves modificaciones, un cuarto de siglo. Podemos preguntarnos si estamos ante una nueva mutación y si el medio le permitirá adaptarse o será una de tantas mutaciones que desaparecen con el mutante.

Las innovaciones introducidas en los últimos seis años han sido tan abundantes y radicales que resulta imposible hablar de un mismo sistema político. De todas estas modificaciones la más importante, en el plano de lo inmediato, se antoja ser la división y sustitución del personal político, como consecuencia de la sucesión presidencial. Esta fractura se produjo cuando la sucesión abandonó sus propias reglas. Resulta imposible fallar sobre la virtud de esta medida, pues si por un lado el futuro presidente accede al poder libre de compromisos con la mayoría de la clase política, con unas posibilidades de selección casi absolutas, por otro aparece la soledad y el aislamiento del mismo poder, una ruptura, quizás temporal, quizás duradera, con

quienes tuvieron y en parte conservan el control político del país. La formación de una nueva clase política —no de un gobierno—, su socialización, moralización, entrenamiento y aceptación, exigen tiempo, el recurso más escaso de un político. Nuestra clase política ha pecado de los peores excesos y, de todos ellos, el peor de todos fue y es la corrupción, pero mantuvo la virtud de la disciplina: cuando piensa, no habla, cuando habla, glosa.

Esta clase política ha dado muy pocas muestras de disciplina desde la institucionalización de la Revolución, por lo demás castigadas con una severidad ejemplar. No ha evidenciado, ahora, el entusiasmo y esperanzas habituales: la reticencia, el temor y la frustración son, en ella, palpables. Las declaraciones de principio no logran esconder el abismo que separa a sus facciones.

El origen popular de la soberanía en México es aparente y formal: el poder real se origina en una constelación de élites políticas y económicas competitivas, sobre las que priva, en los temas fundamentales, como la inclusión o exclusión de los grupos y clases sociales, un consenso general. Una fractura entre estas élites introduce una mengua de su solidez; un conflicto abierto entre ellas se traduce por una disminución de la legitimidad del sistema político.

La consolidación del sistema de partidos en torno al partido dominante y la limitación de éste a través de un sistema electoral menos controlado por el Ejecutivo federal supusieron una ampliación de las bases legales y legitimadoras del régimen. La lucha faccional dentro del partido dominante condujo a una crisis general del sistema de partidos y a una casi bancarrota del proceso de renovación de las élites políticas. Los pasos dados para seleccionar y elegir candidatos se dieron, una vez más, fuera de los caminos trazados por el propio partido, prolongación del Ejecutivo.

La lucha de facciones se dio primero en el interior del PRI —suponiendo que todas las luchas políticas de la familia revolucionaria se dan en su seno—, y del PRI derivó hacia los partidos de oposición, el PPS y el PARM, que asumieron actitudes que en nada correspondían a su papel en el sistema político y aceptaron convertirse en instrumentos faccionales del PRI o de miembros de la familia revolucionaria. Sobre el suicidio del PAN es imposible averiguar en el estado actual de conocimientos cuales fueron las causas reales que lo motivaron. El carácter artificial de los partidos opositores de izquierda se ha podido advertir tan pronto como terminó la campaña electoral y desapareció el único tema que los motivó: la derogación de la ley electoral.

Se ha conferido una mediana y distraída atención a la destrucción del sistema de partidos, confundiendo, quizás por simple ignorancia de la prensa y de una parte de la clase política, al sistema político con el gobierno. No se ha querido ver en la oposición organizada o difusa a una parte esencial del sistema político, y no se ha querido suponer que una alteración de una parte constitutiva del sistema implica necesariamente una reordenación de las demás. El PRI había luchado por dejar de ser un partido único y transformarse en dominante; hoy está al borde de volver a ser único ¿podrá adaptarse a ello? Llevar adelante una política directa del Estado en beneficio de las mayorías generó forzosamente una reacción de quienes se sintieron lesionados por estas acciones. La crítica y la oposición se manifestaron de la manera más agresiva —defensora del *statu quo ante*— por medio de los grupos de presión empresariales y en algunos casos no empresariales. La oposición se manifestó también en una parte de la clase política y en la clase media, aunque en este caso fueron acciones mediatizadas por grupos de presión definidos quienes encabezaron

y concretaron la protesta —las asociaciones de padres de familia contra el libro de texto gratuito, por ejemplo. La respuesta política no pudo ser más pobre: identificar esta reacción con el PAN y decir que éste se acaba con el asfalto equivale a reconocer su carácter estrictamente urbano, cosa cierta, pero es olvidar que *también* los obreros son urbanos. Por desgracia no sabemos si en nuestras ciudades el voto se manifestó dentro de las fronteras de clase o las cruzó. Si esto se ignora, se conoce perfectamente el triste papel de la oposición en las elecciones de julio de 1976 y el fallo que hubieran podido dar de estar presentes los partidos que supieron actuar en 1973, pues unas elecciones nacionales o locales se establecen sobre una doble vertiente: por un lado *juzgan* la obra del gobierno que termina su ejercicio y, por otro, *prejuzgan* la labor del que empieza, al menos en lo que hace a nuestro proceso electoral. Los partidos de oposición no son una alternativa real de cambio de élites gobernantes, pero son la piedra de toque de los equipos en el poder. Escaparse de un dilema presente, aunque sea un falso dilema, para echarse en brazos de la historia no soluciona, de hecho, el problema presente que es, al menos en este aspecto, político y no histórico. La historia no la escriben sus actores y los juicios no son emitidos nunca por los iguales.

La pregunta es cuáles son los puentes, los canales de comunicación entre gobernantes y gobernados. Nada más peligroso para una clase política que la incredulidad y el cinismo de aquellos sobre quienes ejercen un poder. Cuando el Estado asume el poder de informador y crítico, se aleja indefectiblemente de cualquier forma de diálogo. Acallar a la crítica a través del silencio o de las verdades a medias es la peor tentación para una clase política en crisis: los resultados de este control suelen ser los contrarios de los esperados. Reforzar el autoritarismo no puede evitar la politización del país, el interés colectivo por saber cómo y por quiénes se ejerce el poder y, en algunos casos, el intento de participar en su formación y distribución. Cerrar estas vías de información, presuponer que las masas o la nación pueden manifestarse por vías que no son institucionales es aceptar de antemano un totalitarismo de izquierda o derecha, pero totalitarismo al fin y al cabo.

De la amarga coyuntura en que nos movemos sólo podremos salir con la ayuda del Estado, del único que la nación tiene y que, por lo demás, es el único humanamente previsible. Para que este Estado recupere la fuerza que tuvo, para volver a ser el creador y organizador que fue, debe obtener otra vez la confianza de los ciudadanos, hoy erosionada de manera alarmante. Su primer acto obligatorio es aceptar y mantener una legalidad que él solo creó, legalidad autoritaria, a nadie se le esconde, pero más tolerable que lo inesperado.